
EL ESTADO SOLIDARIO EN LA REFORMA GLOBAL DEL ESTADO

Vivimos grandes transformaciones en las funciones del Estado capitalista. En este trabajo comentaremos un aspecto que, aunque en sentido estricto se ubica en lo que se refiere a la participación económica, tiene consecuencias de amplio contenido social y político.

Dentro del conjunto de modalidades en la actuación económica del Estado mexicano, en particular se encuentra el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol). Un proyecto que, a diferencia de los anteriores, plantea como puntos centrales dos elementos: la participación ciudadana en la satisfacción de necesidades materiales y la asignación de recursos monetarios a determinados grupos sociales.

Así, desde mediados del año pasado, el Programa Nacional de Solidaridad ha ido entregando distintas cantidades monetarias a maestros del sistema educativo oficial de los niveles preescolar, primario y secundario para que se hagan responsables de la construcción de nuevas aulas y de labores de mantenimiento en sus planteles; a grupos de colonos para que trabajen en el aprovisionamiento de servicios públicos; becas para estudiantes del nivel superior; y a otros grupos sociales cuyas demandas urgentes exigen recursos monetarios.

Estos proyectos se plantean como "solidarios" porque pretenden unir el esfuerzo de Estado —vía asignaciones monetarias— con el de la sociedad —vía trabajo comunitario.

En estos dos elementos —participación de la comunidad y asignación directa de recursos monetarios— se presenta un gran viraje en el modo como el Estado mexicano había incidido, durante décadas, en el comportamiento económico del país, sustituyendo políticas características de lo que se dio en llamar Estado Keynesiano: una intervención económica basada en el gasto gubernamental canalizado como inversión directa en empresas públicas y en construcción de servicios públicos subsidiados.

Después de, aproximadamente, siete años (1983-1990) en que el esfuerzo del gobierno mexicano se concentró en la venta de empresas paraestatales y cuando la derrama de recursos monetarios con fines sociales se comprimió al máximo, se ha iniciado, desde mediados del año pasado, una nueva forma de asignaciones monetarias que, como hemos mencionado, se realizan de manera directa para grupos sociales claves y para proyectos específicos.

Proyectos como el Pronasol definen cambios en las funciones del Estado porque, si bien, su ingerencia en la economía permanece, existe variación en los medios como el Estado pretende lograr determinados comportamientos sociales.

En el modo keynesiano de participación estatal la sociedad se ve como constituida por dos sectores fundamentales: el de los inversionistas y el de los consumidores. El objetivo central de la política económica era impulsar acciones que provocaran en ellos un comportamiento propicio para el crecimiento económico.

Hoy, con proyectos de "solidaridad" se pretende incidir en grupos sociales cuya definición no se centra exclusivamente en su carácter inversionista consumidor sino en su ubicación social y su visión política de la realidad: maestros de escuela, estudiantes, colonos, amas de casa. Aquí el objetivo de la política económica es lograr que empresarios y trabajadores eleven la productividad para desarrollar mayor competitividad en el mercado internacional.

Es decir, hoy en día ya no se trata únicamente de dirigir un ciclo de crecimiento económico. Programas como Pronasol tienen la función de contrarrestar las posibilidades de conflicto social surgidas del desempleo, de la disminución de la capacidad adquisitiva del salario y, en general, de la desigualdad en la distribución del producto económico; también persiguen el objetivo de contrarrestar el descontento popular que han generado la venta de empresas paraestatales, el endeudamiento externo y el mayor apoyo gubernamental a la inversión extranjera; acciones todas que ponen en cuestionamiento la soberanía nacional.

Estas funciones de carácter estrictamente político y social que cumple Pronasol sugieren la siguiente reflexión: Aun cuando la ola neoliberal que pugna por el retiro del Estado de la intervención económica se expandió por el orbe desde fines de la década de los setenta, lo cierto es que, hasta la fecha, las fuerzas del mercado sólo han recuperado parte de los espacios que supuestamente poseían antes del Estado keynesiano.

En el nivel interno, la venta de empresas públicas y la disminución de subsidios, por lo menos en el caso de México —aunque no es el único país, en donde se han tomado estas medidas— han incidido en un "saneamiento" del gasto público en cuanto al manejo de su déficit y endeudamiento; también han disminuido el peso que ese gasto público tenía en la inversión productiva nacional y en el Producto Interno Bruto (PIB); pero no han permitido, ni propiciado, el retiro definitivo de la acción estatal para dirigir el comportamiento económico del país.

En el nivel externo ese retiro estatal ha demostrado que las fuerzas del mercado, dejadas en absoluta libertad, agudizan la competencia internacional entre capitales y amenazan a la soberanía de los estados nacionales. En la medida en que no es posible hacer abstracción de las diferencias de productividad y competitividad entre países, una década de neoliberalismo ha esclarecido la necesidad de que el Estado siga cumpliendo un papel muy importante en

la economía, si bien, bajo modalidades distintas a las tradicionales.

Estas modalidades implican:

1. Las políticas, llevadas a cabo durante los últimos años, que han tenido como uno de sus objetivos que los costos de la inversión productiva no graviten sobre el gasto público y que las relaciones de producción cubran ciclos más ligados a los mecanismos de la oferta y la demanda.

2. La existencia de proyectos "solidarios" que complementen las medidas neoliberales de la política económica y contrarresten sus efectos en la sociedad.

En este sentido podemos sugerir, a manera de hipótesis, las siguientes ideas:

1. Los proyectos "solidarios" son necesariamente complementarios de una política que impulsa una reestructuración económica donde el gasto público ha abandonado la función de generar empleo.

2. Los proyectos "solidarios" inciden de manera selectiva en determinados "grupos sociales" cuya ubicación social

y política presenta gran potencial opositor y que cuestionan la legitimidad del gobierno.

3. La evolución reciente de la política económica no parece llevar a un retorno al Estado liberal del siglo XIX. La propia existencia de proyectos "solidarios" es un indicio de ello.

4. Pareciera entonces que lo que se podría llamar "Estado solidario" significaría un paso adelante hacia una participación estatal más profunda que la conocida con el Estado keynesiano tradicional, donde, además de desarrollarse políticas de carácter general para una economía, tratando de adecuarla más a los mecanismos de la oferta y la demanda, se impulsen políticas que contrarresten los efectos sociales y políticos que las primeras generen. Esto implicaría que la participación del Estado en la sociedad ya no es solamente económica sino que la política adquiere un peso especial que no había tenido hasta la fecha.

Todo ello, claro, si proyectos como Pronasol se convierten en modos estructurales de la acción gubernamental.

María del Carmen Solórzano